

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 30 SEP 2020

Auto Interlocutorio No. _____

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76147-33-33-001-2017-00100-01
DEMANDANTE:	DIANA LUCIA ZAPATA OCAMPO Y OTROS
DEMANDADO:	HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA Y OTROS
ASUNTO	CONFIRMA AUTO

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por los demandados Marcela Betancur Betancur, María Eugenia Diago Armero y Juan Manuel Chamorro Solórzano, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cartago en la audiencia inicial del 30 de mayo de 2019, mediante el cual declaró no probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva.

II. ANTECEDENTES

2.1 Pretensiones

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, los señores Diana Lucía Zapata Ocampo, Martha Lucia Ocampo Montes y Duvan Restrepo Rosero, demandaron al Hospital Santander de Caicedonia - Valle del Cauca y a los señores Marcela Betancur Betancur, María Eugenia Diago Armero y Juan Manuel Chamorro Solórzano, a fin que se les declare administrativamente responsables por los daños y perjuicios morales y materiales causados en ocasión a la muerte de la menor María Fernanda Valencia Zapata, producto de una falla en el servicio por negligencia médica.

2.2 Del auto apelado

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cartago, mediante decisión proferida en la audiencia inicial del 30 de mayo de 2019, declaró no probada la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva, presentada por los demandados.

Consideró que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha referido a la legitimación de hecho como la relación procesal que se establece entre los

demandantes y los demandados por intermedio de la relación jurídica que nace de la imputación de la conducta demandada la cual corresponde resolver en la audiencia inicial, y la legitimación material refiere a la causa que determina la participación real de las personas en el hecho que originó la formulación de la demanda, la cual resulta de la evaluación probatoria que permiten la imputabilidad por acción u omisión en sus funciones al ente accionado.

2.3 Fundamentos del recurso de apelación:

Inconforme con la decisión, los apoderados judiciales de los demandados, presentaron recurso de apelación contra la decisión, por cuanto declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Manifestó el apoderado judicial de la demandada Marcela Betancur textualmente lo siguiente (intervención minuto 37:30):

"(...) La mía radica en que la excepción debió prosperar porque si se observa de manera clara, hay una inexistencia del nexo causal entre lo alegado por los demandantes y la doctora Marcela Betancur, se reitera señor juez y honorables magistrados, las atenciones prestadas por la doctora Marcela Betancur en los días 2 de marzo los días 8 y 9 de marzo del año 2015, no las realizó en ejercicio de su profesión de manera privada, particular, en su consultorio, sino en representación de una entidad de su empleador quien para ese momento era la E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia, la doctora Marcela Betancur lo único que hizo fue atender a la menor en el servicio de urgencias, formular, dar su diagnóstico de acuerdo a los síntomas presentados en ese momento y acorde siempre con las guías medicas de acuerdo a la patología que presentaba en su momento, insisto señor juez en el presente proceso la doctora Marcela Betancur no puede ser objeto o centro de imputación jurídica por cuanto repito no existe un nexo de causalidad entre los hechos que al parecer han ocasionado unos perjuicios esgrimidos por los demandantes en su escrito y la actuación de la médica por mi defendida, si bien la legitimación en la causa ya sea material o de hecho u otra, no depende solo de la acreditación de la responsabilidad atribuida o la imputación como se ha dicho, reitero señor juez y honorables magistrados, aquí no existe una relación jurídica sustancial o con la fuerza tal, o con el peso suficiente que se pueda deducir la vinculación de mi prohijada a este proceso, de manera tal que mi defendida resulta ajena a las circunstancias aquí señaladas y no está legitimada para ser convocada a un juicio o responsabilidad patrimonial como el que hoy ocupa la atención de su despacho, es por lo anterior señor juez de manera respetuosa y honorables magistrados que pido se revoque la decisión apelada y como consecuencia se declare probada la excepción propuesta en el escrito de contestación de la demanda (...)

En igual sentido, el apoderado de los demandados María Eugenia Diago Armero y Juan Manuel Chamorro Solórzano manifestó lo siguiente (intervención minuto 42:35):

"Como ya lo dijo mi colega, es claro que no existe un nexo causal o que se pueda probar que dichos actos que causaron el triste fallecimiento de la menor María Fernanda Valencia Zapata se haya causado por hechos atribuidos de manera directa y privada con mis poderdantes, toda vez que dichas circunstancias de las cuales se les acusa a mis prohijados fueron relacionados con el servicio prestado los días 6, 7 y 8 del mes de marzo del año 2015 en turnos que cumplían mis



poderdantes dentro de la E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia – Valle, y sustento mi presente recurso con base en la posición del Consejo de Estado – Sección Tercera – sentencia del 16 de septiembre de 1999 – magistrado ponente Ricardo Hoyos Duque, en cual expresa que atribuir un daño causado por el agente del servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, para esta atribución solamente es posible cuando el daño ha tenido vinculación al servicio, es decir, que la actuación de los funcionarios solo compromete el patrimonio de la entidad pública cuando la misma tiene un nexo o vínculo con el servicio público, este concepto emitido por el Consejo de Estado, solamente acentúa la posición que tengo con respecto a la legitimación en la causa por pasiva su señoría, toda vez que considero que dichos actos tal como lo dice este concepto, fue atribuido a hechos de la prestación del servicio público, por lo tanto su señoría es claro que no existe ningún nexo que pueda vincular a mis poderdantes dentro del presente trámite o puedan ser juzgados dentro del presente trámite procesal, por lo tanto su señoría le solicito que dicha decisión de negar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva sea revocada (...)."

De los recursos interpuestos se corrió traslado al apoderado de la parte actora quién expresó (intervención minuto 45:35):

"En cuanto a las apelaciones nótese su señoría y honorables magistrados que ambos profesionales del derecho hablan de temas como el diagnóstico, que cada profesional médico realizó, hablan de que tienen que tener una concordancia con las guías médicas pero como bien lo explicó usted en su intervención son temas que se deben de abordar directamente en el proceso como tal y agotar con los elementos materiales probatorios si hubo o no hubo responsabilidad frente a estos hechos de estas personas, ahora bien, téngase en cuenta de que los médicos actúan en razón a un servicio público que prestan dentro de la E.S.E. pero ellos también tienen unas aseguradoras que son exigidas por la Ley para que puedan prestar este servicio de salud, es más si ellos no fuera posible llamarlos a un juicio de esta clase o de esta índole, pues sería impertinente que la Ley les obligue a tener las pólizas de seguro para poder desarrollar su labor como médicos (...)"

III. CONSIDERACIONES:

3.1. Problema Jurídico

Teniendo en cuenta la decisión adoptada en primera instancia, y atendiendo las competencias legalmente atribuidas a esta Corporación, el problema jurídico consiste en determinar si debe prosperar o no la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por los demandados.

Para efectos metodológicos, el estudio del asunto se desarrollará en el siguiente orden: i) de las excepciones previas, ii) de la falta de legitimación en la causa por pasiva y, iii) solución al caso concreto.

3.2. De las Excepciones Previas

Debe señalarse que, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 del CPACA, en la audiencia inicial se resolverán las excepciones previas y las de



Radicación : 76147-33-33-001-2017-00100-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : DIANA LUCIA ZAPATA OCAMPO Y OTROS
Demandado : HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA Y OTROS

5

subjetivo sustancial sobre el cual versa la pretensión que es objeto del proceso».

Por su parte, la doctrina ha dicho que esta es⁴ «la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada».

En virtud de esa definición una persona puede formular o controvertir las pretensiones contenidas en una demanda, ello en razón a la conexión aludida entre las partes y entre estas y las pretensiones.

Así las cosas, quien acude ante la jurisdicción actúa porque estima ser titular de un derecho vulnerado (legitimación en la causa por activa) y quien es demandado y contradice la pretensión lo hace porque es responsable de la violación o porque legalmente puede ser a quien corresponda asumir determinada obligación⁵ (legitimación por pasiva).

La legitimación, ya sea activa o pasiva, puede presentarse de dos maneras, a saber⁶:

i) De hecho: surgida con la presentación de la demanda y la notificación del auto admisorio de esta. Permite a los sujetos actuar dentro del proceso y ejercer su derecho de defensa.

ii) Material: referente a la relación existente entre las partes y los hechos que soportan las pretensiones, ya sea porque ocasionaron la vulneración de los derechos o porque son las afectadas directamente con ellos. Así pues, se ha dicho que únicamente es predicable de quienes participaron en los hechos que dieron lugar a la demanda⁷.

Ahora, en lo que se refiere a la excepción de falta de legitimación por pasiva, no siempre puede ser declarada durante el desarrollo de la audiencia inicial, toda vez que debe analizarse si el argumento invocado se refiere a la legitimación por pasiva de hecho o material, ya que una y otra atacan aspectos procesales diversos.

Lo anterior, porque el artículo 180 del CPACA estableció que en esta etapa del proceso corresponde al juez decidir sobre las excepciones que tengan el carácter de previas, esto es, aquellas que van encaminadas a atacar la forma del proceso y constituyen «defectos del procedimiento y verdaderos impedimentos procesales⁸» y que se encuentran contempladas en el artículo 100 del Código General del Proceso⁹.

Bajo esa perspectiva, en la audiencia inicial solamente el juez puede pronunciarse respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva de hecho, en tanto que esta se refiere a aspectos de tipo procesal, luego, aunque no es

⁴ Echandía Devis Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo I, Teoría General del Proceso. Octava Edición. Editorial A B C, Bogotá 1981. Página 287.

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 73001-23-33-000-2013-00410-01(1075-14). Actor: Alicia Cortes Bocanegra Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Tolima, Secretaría de Educación. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D. C., 14 de mayo de 2014.

⁶ Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 25 de marzo de 2010. Radicación 05001-23-31-000-2000-02571-01(1275-08). Actor: Oscar Arango Álvarez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y otros. Magistrado ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

⁷ Ibidem.

⁸ Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho procesal, Tomo I, Teoría General del Proceso, Octava edición, Bogotá, Editorial A B C, 1981, página 257.

⁹ Aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA.

propriadamente una excepción previa, sí tiene el carácter de mixta porque ataca la pretensión y el trámite del proceso, último aspecto que permite que encaje dentro del supuesto de la norma enunciada y específicamente en lo consagrado en el ordinal 6.º ibídem que autoriza al juez a resolver la excepción aludida en cuanto tiene este carácter.

Tal perspectiva no puede aplicarse cuando se alegue la falta de legitimación en la causa por pasiva material, puesto que en este evento se debate si la actuación del demandado fue acorde con el ordenamiento jurídico o no y si es el que debe asumir determinada obligación y por ende, a quien corresponde el restablecimiento del derecho, lo que debe ser resuelto en la sentencia. Sobre el particular la jurisprudencia de la Sección ha manifestado lo siguiente¹⁰:

Así las cosas, resulta claro que cuando se hace necesario determinar si las personas vinculadas tienen "obligación de anular una actuación administrativa y/o restablecer un derecho", la decisión encaminada a establecer la legitimación material o sustancial, debe producirse a través de sentencia y no en desarrollo de la audiencia inicial puesto que aquella legitimación requiere sentencia de mérito¹⁵ mientras que en tratándose de la legitimación de hecho o procesal¹⁶, esta debe resolverse en desarrollo de la audiencia inicial, en tanto obedece forzosamente a un presupuesto procesal que debe estudiarse y resolverse en el marco de la primera etapa del proceso, lo que precisamente configura la denominación doctrinal que se le ha dado de excepción "mixta" (Resalta el Despacho).

En atención a lo expuesto, en la audiencia inicial solo es procedente el estudio de la excepción de la falta de legitimación en la causa por pasiva de hecho y no material, y esta última corresponde resolverla al juez en la sentencia al tener relación directa con el derecho discutido y la responsabilidad del restablecimiento del derecho."

3.4. Caso Concreto

De conformidad con el artículo 328¹¹ del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306¹² del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Consideraron los apelantes en síntesis, que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva debe prosperar, en razón a que no existe un nexo causal entre lo alegado por los demandantes y los demandados, por cuanto que las

¹⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda Subsección A. Radicación: 08001-23-33-000-2012-00206-01(0402-14). Actor: Inés María Carrillo Roa. Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Departamento del Atlántico, municipio de Piojó. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá D.C. 7 de abril del 2016.

¹¹ ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

¹² ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

gestiones realizadas en el ejercicio de sus profesiones, no se hicieron de manera particular o privada, sino en representación de la entidad prestadora del servicio de salud E.S.E. Hospital Santander de Caicedonia – Valle.

Para el efecto, se refirió como precedente una sentencia del Consejo de Estado que expresó que el atribuir un daño causado por el agente prestador del servicio del Estado, solo es posible predicarlo cuando el daño ha tenido vinculación al servicio, es decir, que la actuación de los funcionarios solo compromete el patrimonio de la entidad pública cuando la misma tiene un nexo o vínculo con el servicio público y se solicitó revocar la decisión recurrida.

Ahora bien, de conformidad con la normatividad y jurisprudencia señalada en precedencia, pertinente es concluir que la **legitimación de hecho** hace referencia a la calidad de demandante y demandado, es decir, a la relación procesal que nace con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio, en este caso la vinculación y su notificación a quien asumirá la posición de demandado; mientras que la **legitimación material**, refiere al vínculo entre las partes por los hechos constitutivos del litigio, independientemente de que sean parte o no dentro del proceso, por lo que se puede concluir que la legitimación de hecho constituye un requisito de procedibilidad de la demanda, mientras que la material es un requisito para la prosperidad de las pretensiones invocadas en el escrito de la demanda.

Por ello, teniendo en cuenta el marco jurisprudencial y los supuestos facticos narrados en precedencia resulta evidente que, los demandados están legitimados de hecho en este momento procesal, otra cosa es que, al momento de la sentencia concorra la legitimidad material haciéndolos responsables de los perjuicios que en la litis reclaman los demandantes, en razón a que desde esta perspectiva es una cuestión propia del derecho sustancial, toda vez que, alude a la cuestión debatida en el proceso tal como lo alega la parte demandante.

Por lo anterior, puede este Despacho establecer que de acuerdo al criterio jurisprudencial mencionado en líneas anteriores los demandados Marcela Betancur Betancur, María Eugenia Diago Armero y Juan Manuel Chamorro Solórzano, están legitimados de hecho dentro del presente proceso, por haber sido llamados en calidad de demandados al presente proceso, notificados del auto admisorio de la demanda.

Puede entenderse de igual forma, que al menos en principio tendrían legitimidad material por pasiva para actuar dentro del presente proceso, por tener presuntamente una relación directa con los hechos que dieron lugar al mismo, sin embargo, este no es el momento procesal oportuno para estudiar la legitimación en la causa material, por lo que el Despacho encuentra acertada la decisión adoptada por el Juez, como quiera que declaró no probada la excepción de falta de legitimación alegada por los demandados, sin que esto signifique que no se hará el estudio pertinente al resolver la sentencia.

Radicación
Medio de control
Demandante
Demandado

: 76147-33-33-001-2017-00100-01
: REPARACIÓN DIRECTA
: DIANA LUCIA ZAPATA OCAMPO Y OTROS
: HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA Y OTROS



8

En razón de lo anterior, comparte el Despacho la decisión adoptada por el a quo en el sentido de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de los demandados Marcela Betancur Betancur, María Eugenia Diago Armero y Juan Manuel Chamorro Solórzano, pues en este momento no existen los suficientes elementos de juicio para tomar una decisión de tal firmeza que podría afectar los resultados del proceso, es por eso que dicha decisión merece un estudio minucioso y dedicado que solo podrá establecerse al momento de dictar sentencia.

En consecuencia, resulta meritoria la permanencia de los demandados en el proceso para que en el momento procesal oportuno, esto es, en la sentencia sea donde se defina su legitimación material.

En consecuencia; se,

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida en la audiencia inicial del 30 de mayo de 2019, por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Cartago, mediante el cual declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Una vez en firme la presente decisión, **DEVUELVASE** el expediente al juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado

VoBo Secretario
Proyecto Amnis